

Sentencia del Tribunal de Circuito.

Guadalajara, Marzo 4 de 1874.—Vista esta acta criminal sustanciada y resuelta en el Juzgado de Distrito de Aguascalientes, contra Bernardina Suarez por tráfico de moneda falsa; apareciendo arreglado á derecho el procedimiento y la sentencia que se pronunció en 20 del mes próximo pasado, se declara: que el Juez de Distrito, C. Lic. Isidro Arteaga, no incurrió en responsabilidad; y solo se le encarga, remita á la Jefatura de Hacienda del propio Aguascalientes, las monedas aprehendidas, á fin de que dicha oficina haga á su vez otro tanto, remitiéndolas á la casa de moneda de Zacatecas.

Dése cuenta con este negocio á la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y remítanse copias de este auto y de la sentencia de 20 de Febrero, al Semanario Judicial.—*Juan Robles Martínez.*—*Tomás Bravo*, secretario.

Es copia. Guadalajara, Marzo 5 de 1874.—*Tomás Bravo*, secretario.

Pedimento del C. Procurador general de la Nación.

El Procurador general interino dice: Que en 21 de Enero último, el Juez de Distrito de Aguascalientes, comenzó á instruir la correspondiente causa á Bernardina Suarez por circulacion de moneda falsa, y comprobada que fué la existencia del delito, condenó á la delincuente al pago de veinte reales por multa cuádruplo de los cinco reales falsos que circuló, y en caso de no pagarlos, á sufrir el arresto de dos y medio dias.

Conforme con esta determinacion el Promotor, la reo y su defensor, se remitió la causa al Tribunal de Circuito respectivo, cuyo Tribunal en Marzo 4 de este año, confirmó en lo sustancial lo determinado en el

Juzgado de Distrito respectivo. El que suscribe, habiendo examinado esta averiguacion, y encontrándola arreglada á derecho, tanto en sus procedimientos como en lo sustancial, pide á esta 1ª Sala se sirva declarar que no hay mérito para exigir la responsabilidad á los Jueces que intervinieron en el proceso, y lo dé por revisado.

México, Abril 1º de 1874.—*García Ramírez.*

Auto de revision de la Suprema Corte de Justicia.

México, Abril 10 de 1874.—Por revisado y no apareciendo mérito para la responsabilidad, devuélvanse las actuaciones y archívese á su vez el Toca.—*José María Iglesias.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*Simón Guzman.*—*Enrique Landa*, secretario.

Es copia. México, Abril 29 de 1874.—*Alejo Gomez Elguarte*, oficial segundo.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Sinaloa por D. Guillermo Sovverbuts, contra la providencia del C. Tesorero general del Estado, que haciendo uso de la facultad económico-coactiva, le exige, por las mercancías importadas á Mazatlan en la barca alemana "Gueller," la cantidad de \$ 8,370 94 cs.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito:

El Promotor fiscal dice: El Sr. D. Guillermo Sovverbuts, se ha presentado ante V. solicitando amparo por el cobro que le ha hecho la Tesorería general del Estado de \$ 8,370 94 cs. ocho mil trescientos se-

tenta pesos noventa y cuatro centavos, por derecho de consumo de 8 por ciento que impuso el decreto de 31 de Diciembre próximo pasado, sobre \$ 104,634 28 cs. ciento cuatro mil seiscientos treinta y cuatro pesos veintiocho centavos, que importó el cargamento que á su consignacion vino en la Barea "Gueller." Funda su queja en la fraccion 1ª del art. 1º de la ley de 20 de Enero de 1869, por creer violadas en su persona las garantías que concede el art. 16 de la Constitucion general de la República, por negar la competencia así al Congreso del Estado para haber expedido el decreto referido, como á la Tesorería general para ejecutarlo por medio de la facultad coactiva. En efecto, conforme á la fraccion 9ª del art. 72 de la Constitucion, solo al Congreso general corresponde expedir aranceles sobre comercio extranjero, y solo el tiene facultades para impedir, por medio de bases generales, que en el comercio de Estado á Estado, se establezcan restricciones onerosas.

Segun la fraccion 1ª del artículo 112 de la misma Constitucion, los Estados no pueden establecer derechos de tonelaje ni otro alguno de puerto, *ni imponer contribuciones ó derechos sobre importaciones ó exportaciones.*

Los artículos 19 y 83 del arancel de 1º de Enero del año anterior, son todavía mas explícitos; mas como están expresamente derogados por la ley de 31 de Mayo de 1872, no hay ya para que hablar de ellos. Que no es competente la Tesorería general del Estado para asegurar el pago de estos derechos por medio de la facultad coactiva, dependerá de las anteriores premisas, es decir, si el Congreso del Estado tuvo facultades para expedir la ley de 31 de Diciembre último; es indudable tambien la facultad de la Tesorería para hacer efectivo el cumplimiento de esa ley por medio de la facultad coactiva, puesto que esta está declarada vigente por el supremo decreto de 11 de Diciembre de 1871, expedido en uso de las

facultades extraordinarias. Se dirá que conforme á las leyes que reglamentan el ejercicio de esa facultad, ésta no tiene lugar sino cuando se trata de adeudos claros é indudables; pero es evidente que aquí lo será desde el momento en que se conozca el valor de los derechos de importacion que causaron estos efectos, puesto que solo hay que tomar el 8 por ciento sobre el importe de esa importacion. Además, posteriormente se ha presentado la liquidacion por la Tesorería, y es evidente que se trata ya de un cobro ó de un adeudo claro é indudable. Se funda tambien el peticionario, en que siendo la emision de la moneda y por consiguiente la responsabilidad de su amortizacion, cuando resulta desapreciada como sucede con la de cobre para cuya amortizacion se ha expedido el decreto de 31 de Diciembre último, únicamente de la competencia y responsabilidad del Gobierno general, que es el que puede establecer casas de moneda y fijar las condiciones que deba ésta tener, no corresponde de ninguna manera al Estado ingerirse en estos asuntos, ni mucho menos imponiendo contribuciones gravosas al comercio en general.

A todo lo anterior, el que suscribe tiene que hacer presente: que la expedicion del decreto de 31 de Diciembre, solo tuvo por objeto remediar hasta donde fuera posible, el estado de la crisis monetaria que tuvo lugar en esos dias con motivo de haber bajado notablemente de valor la moneda de cobre que en el mismo circulaba. Circunstancias excepcionales debian dar lugar á una ley excepcional, y entre el inmenso mal del desaprecio del cobre y el recaigo de algunos impuestos que en último caso no son las casas importadoras quienes lo sufiran sino el público consumidor, pareció hasta equitativo lo dispuesto por el Congreso del Estado; mas no es esta la cuestion que debe tratar el que habla, pues únicamente tiene que examinar si en frente de nuestras disposiciones constitucionales puede subsistir el referido decreto. Es verdad que la

fraccion 9ª de la Constitución, solo al Congreso general dá la facultad de expedir aranceles y bases generales para impedir restricciones onerosas en el comercio de Estado á Estado. ¿La ley pues de 31 de Diciembre, es una restriccion onerosa? Que esa ley está infringiendo el artículo 112 de la misma Constitución general, puesto que impone una contribucion sobre las importaciones, dice la parte quejosa, y esto en efecto es cierto, pues que así lo dice expresamente el referido decreto. Se ha quebrantado, pues, al expedirlo, esa Suprema ley á que debemos ocurrir en última instancia para decidir todas las controversias; y por lo mismo, por mas claro, líquido é indudable que sea el cobro que se hace al Sr. Sovverbuts, la Tesorería general del Estado no tiene facultad para ejercitar la coactiva con el fin de hacer efectivo el pago de un impuesto inconstitucional.

Por lo expuesto, y no deteniéndose á dilucidar mas esta cuestion por falta de tiempo, el que suscribe, fundado como ha dicho antes en la inconstitucionalidad del decreto núm. 35 de la II. Legislatura del Estado, concluye pidiendo que se declare por ese juzgado, que la Justicia de la Union ampara y protege al Sr. D. Guillermo Sovverbuts, contra los procedimientos de la Tesorería general del Estado, que trata de hacer efectivo el cobro de \$ 8,370 74 cs., importe del 8 por ciento de consumo impuesto por el art. 39 del antes referido decreto núm. 35, de 31 de Diciembre último.

Mazatlan, Febrero 28 de 1873.—L. Gaona.

Sentencia del O. Juez de Distrito.

Mazatlan, Marzo 31 de 1873.—Visto el juicio de amparo promovido por D. Guillermo Sovverbuts, contra la providencia dictada por el C. Tesorero general del Estado en uso de la facultad económico coactiva, para exigirle la cantidad de ocho mil tres-

cientos setenta pesos noventa y cuatro centavos \$ 8,370 94, á que asciende el 8 por ciento de consumo que establece el decreto expedido por la Legislatura del Estado en 30 de Diciembre del año próximo pasado bajo el núm. 35, calculado aquel sobre las cuotas de importacion que se señalan á los efectos extranjeros en el arancel vigente, descargados de la barca alemana "Gueller," alegandose que con tal cobro se viola la garantía que concede el artículo 16 de la Constitución general, y por cuyo motivo funda su ocuso el quejoso, en la fraccion 1ª artículo 19 de la ley de 20 de Enero de 1869. Visto así mismo la providencia dictada, mandando suspender tal cobro inter que se decide el juicio sobre lo principal; el informe dado por dicho empleado, y el pedido por el C. Promotor fiscal con todo lo demas que ver convino.

Y considerando: que al exigir el C. Tesorero general del Estado tal impuesto, ejecuta el decreto citado, el que realmente establece una restriccion onerosa para el comercio de Estado á Estado, á la vez que con el se hace mas gravosa la importacion de efectos extranjeros que se descargan en este Puerto y se internan á otro Estado, por cuya circunstancia pugna aquel con la fraccion 9ª del artículo 72 de la Constitución general, y ademas, de hecho se invade con él la esfera de la autoridad federal.

Considerando igualmente: que aunque el repetido decreto al establecer dicho impuesto lo llama de consumo, no puede estimarse generalmente así para todos los efectos que vienen del extranjero á este Puerto, supuesto que no todos los que son importados se consumen en él, sino que los mas de ellos se internan para su consumo á otros Estados, llevando ya el recargo del 8 por ciento sobre los derechos de importacion que pagaron al importarse, cuyo gravámen es prohibido á los Estados imponer, segun la fraccion 1ª del artículo 112 del mismo Código.

Considerando tambien: que por la inconstitucionalidad dicha del repetido decreto de

30 de Diciembre del año próximo pasado, no pudo expedirlo la Legislatura del Estado, por no tener facultad legal para ello, y por lo mismo tampoco debe tenerla el Tesorero general para ejecutarlo, por cuyo motivo, en este caso, no se tiene como autoridad competente para proceder al cobro, y menos para fundar y motivar su procedimiento, con el que, por esta razón se viola la garantía otorgada por el citado art. 16.

Considerando por último: que aunque por el decreto de 31 de Mayo del año próximo pasado fueron derogados los arts. 19 y 83 del arancel vigente, no por esto deben entenderse interpretadas ni menos derogadas con la dación de aquella, las fracciones 9ª del artículo 72, y la 1ª del 112 de la Constitución general, lo que sería preciso dar por cierto para aplicarla con la extensión que se le quisiera dar, por que sin esta no puede el Estado establecer la restricción onerosa para el comercio de Estado á Estado, que nace de la imposición del 8 por ciento prohibido expresamente por la citada fracción 9ª, y ni tampoco darse por concedido el permiso que expresamente exige la primera también citada, para imponer derechos sobre importaciones, pues cuando mucho, para hacer ambas cosas, podrá suponerse este para la imposición que ha decretado el Estado, cuya suposición no puede tener lugar, por que pugna abiertamente con el sentido liberal y espíritu de tal fracción, al que deben sujetarse los Tribunales para resolver cualquiera cuestión, primero que á cualquiera otra ley, por ser la Constitución la Suprema ley de toda la Unión, según el art. 126 del mismo Código.

Por estas razones, y de conformidad con los artículos 101 y 102 de la misma, y con el parecer del C. Promotor fiscal, fallo con las proposiciones siguientes: 1ª La Justicia de la Unión ampara y protege á D. Guillermo Sovverbuts, contra la providencia dictada por el C. Tesorero general del Estado, para exigir por medio de la facultad económico coactiva, la cantidad de ocho mil

trescientos setenta pesos noventa y cuatro centavos \$ 8,370 94 cs., valor del 8 por ciento de consumo impuesto sobre los derechos de importación que causaron los efectos descargados en este Puerto, de la barca alemana "Gueller." 2ª Sáquense dos copias de esta sentencia, una para publicarla en el periódico oficial del Estado, y la otra para remitirse al Semanario Judicial; y notificada que sea, remítanse los autos á la Suprema Corte de Justicia para su revisión.

El Juez de distrito del Estado de Sinaloa C. Lic. Pedro S. Bermúdez, lo decretó y firmó por ante mí el secretario que doy fé.—Pedro S. Bermúdez.—Francisco Medina, secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Abril 10 de 1874.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Sinaloa, por D. Guillermo Sovverbuts, contra la providencia del C. Tesorero general del Estado, que haciendo uso de la facultad económico coactiva, le exige, por las mercancías importadas á Mazatlan en la barca alemana "Gueller," la cantidad de \$ 8,370 94 cs., á que asciende el derecho de 8 por ciento de consumo sobre efectos extranjeros, establecido por la Legislatura del Estado por decreto de 30 de Diciembre de 1872, determinándose como base para su percepción, las cuotas de importación señaladas en el arancel vigente, manifestando que con tal cobro se viola en su persona la garantía consignada en el artículo 16 de la Constitución federal, por no tener facultad alguna las autoridades del Estado, para imponer derechos sobre importación de mercancías. Y considerando: que la fracción 1ª del artículo 112 de la Constitución de la República prohíbe á los Estados imponer derechos sobre importaciones sin consentimiento del Congreso de la Unión, consentimiento que hasta ahora no

se ha dado por ese poder nacional, pues no se puede considerar como tal la derogacion de los artículos 19 y 83 del Arancel de Aduanas vigente, que decretó la ley de 31 de Mayo de 1872, y que el llamado derecho de consumo contra cuyo cobro se ha promovido el presente recurso, por la manera de exigirlo y por la base determinada para su recepcion, es realmente un impuesto sobre importacion de mercancías extranjeras.

Con fundamento de los artículos 16 y 112 fraccion 1ª de la Constitucion federal, se resuelve: Que es de confirmarse y se confirma la sentencia pronunciada por el Juez de distrito en 13 de Marzo del año próximo pasado de 1873, que declara: que la Justicia de la Union ampara y protege á D. Guillermo Sovverbuts, contra la providencia dictada por el C. Tesorero general del Estado de Sinaloa, para exigirle por medio de la facultad económico-coactiva, la cantidad de \$ 8,370 94 cs., valor del 8 por ciento de consumo impuesto sobre los derechos de importacion que causaron los efectos descargados en Mazatlan, de la barca alemana "Gueller."

Devuélvanse las actuaciones al Juez de Distrito que las elevó á revision, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca. Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José María Iglesias.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José María Lozano.*—*José Arteaga.*—*Pedro Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. Auza.*—*Simon Guzman.*—*Luis Velasquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramirez.*—*Enrique Landa*, secretario.

Es copia que certifico. México, Abril 24 de 1874.—*Lic. Emilio Ordaz*, oficial mayor.

TOMO VI.—PARTE II.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Yucatan por el C. Esteban Perez, contra la Junta Municipal del puerto del Progreso, que le ha impuesto una multa, con violacion de garantías.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

La H. Junta municipal de Progreso contra la cual el C. Esteban Perez promovió este juicio de amparo, dijo en su informe sobre la imposicion de la multa que lo ocasiona, que ella no la habia impuesto, sino que el Tesorero de sus fondos, habia instado ante el Juez de paz de aquel puerto para que se ejecutase la que Perez se oponia á pagar, por infraccion del Reglamento de policía, teniendo el asunto un carácter judicial que lo ponía á cubierto del recurso de amparo; que ademas habia sido indebidamente intentado contra la misma Junta que era del todo inocente del hecho que lo originara.

Esta explícita contestacion, hizo al Fiscal pedir y á V. decretar, que el informe sobre ese hecho lo emitiera el expresado C. Juez, como que él era quien por los documentos adjuntos á este expediente aparecía ejecutándolo; mas semejante autoridad viene á su vez desentendiéndose de la cuestion, y alegando que ella no hace sino ejecutar la multa impuesta por la H. Junta municipal, en uso de sus derechos consignados en el reglamento de policía.

El Juez que así se expresa ha debido tener en cuenta, que para que el negocio fuese propiamente judicial, era preciso que él mismo hubiese impuesto la multa de que se trata en formal sentencia; pues limitándose á ejecutar lo que otra autoridad ha querido aplicar administrativamente, sus procedimientos no pueden estar revestidos de la justificacion que solo puede obtenerse al abrigo de las fórmulas tutelares de un juicio